

COMITÉ FEDERAL DEL PSOE, 19 Septiembre 09

Resolución Política

Celebramos este Comité Federal cuando, tras más de un año, existen indicadores económicos que señalan que han pasado los peores momentos de la tormenta económica y financiera más agresiva que la economía internacional haya sufrido en los últimos cincuenta años. Durante todo este tiempo, desde que se producen los primeros síntomas del cambio de tendencia, el gobierno del PSOE ha ido adoptando, en cada momento y de forma coherente, medidas proporcionales y proporcionadas a unos efectos hasta entonces desconocidos, en una crisis que evolucionaba de forma rápida y agresiva.

Frente a la crisis, el Gobierno de España, en foros multilaterales y en instituciones internacionales y europeas, ha compartido y protagonizado con las grandes potencias económicas y con las economías más dinámicas del mundo una estrategia y unas medidas que están dando sus primeros resultados, a la vista de los últimos datos que nos presentan las principales instituciones económicas internacionales.

El Gobierno socialista ha sido de los más rigurosos a la hora de adoptar y aplicar las medidas pactadas en las grandes instituciones internacionales. Nuestro país está aplicando las recetas pactadas, pero lo está haciendo con lealtad a los principios y valores inspiran a este Gobierno socialista. A pesar de la crisis, y de los impedimentos y restricciones que la misma impone, José Luis Rodríguez Zapatero ha demostrado que los socialistas seguimos comprometidos con la mejora de las condiciones de vida de quienes tienen menos recursos en la sociedad y de aquellos que han

perdido su empleo, porque esa es la única forma de hacer una sociedad más justa, con hombres y mujeres que sean más ciudadanos y tengan un futuro más cierto.

Los socialistas nos podemos sentir orgullosos de un Gobierno que establece como prioridad la cohesión social, y por eso es nuestra obligación transmitir a la ciudadanía que un comportamiento como ese, en unas circunstancias como las actuales, sólo se puede esperar de un Gobierno del PSOE.

El camino que el Gobierno ha recorrido en su política frente a la crisis ha tenido norte y sentido. El norte ha sido, en cada momento y ante cada nueva adversidad, impedir que las familias españolas sucumbiesen de forma irreparable a los diferentes efectos de la crisis. El Gobierno ha trabajado para que nadie quede al margen, fuera de los sistemas y mecanismos de protección.

Por eso, cuando se produjeron las primeras subidas de los precios de los alimentos y las materias primas, el Gobierno trasladó a las familias una importante cantidad de renta para que pudiesen hacer frente a esa circunstancia. Cuando un número importante de trabajadores desempleados han empezado a carecer de todo tipo de prestación o ayuda, el Gobierno ha concebido, por primera vez en la historia, una medida que permite a esas personas y a sus familias disponer de una renta, mientras se forman para insertarse nuevamente en el mercado de trabajo.

Frente a una medida como la de los 420 euros, pactada con los interlocutores sociales, y que no ha adoptado ningún otro Gobierno de

España ante una situación de crisis, las críticas sólo podían venir de una derecha que ante el más leve contratiempo económico lo primero que recortó fueron los derechos de los trabajadores.

Con los objetivos mencionados también coincidía el Plan E, diseñado por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis en la economía real. Siendo el desempleo el principal problema y la preocupación más importante de la ciudadanía, el Gobierno puso en marcha un plan de inversión en obras públicas sin precedentes en la historia de la democracia. A través del Fondo de Inversión Local, los Ayuntamientos de toda España, han creado más de 400.000 empleos y han dado trabajo a más de 14.000 empresas. Con el plan del Automóvil se reactivó el mercado del sector automovilístico y con el plan del turismo se han reformado, modernizado y actualizado infraestructuras turísticas. A través de las líneas del ICO, se han puesto inyectado en la economía 40.000 millones de euros destinados a 275.000 empresas, con el fin de dotarlas de liquidez y permitir la continuación de su actividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Reivindicar el efecto positivo de esas medidas, y sus consecuencias para la economía, el empleo, las familias y los municipios, no sólo es un acto de justicia, sino también la mejor forma trasladar a la ciudadanía el esfuerzo colectivo de solidaridad que todos estamos haciendo, que demuestra las enormes posibilidades de salir adelante si ponemos en ellos todo nuestro esfuerzo y convicción.

Por otra parte, el sentido de una parte de las medidas, lo ha proporcionado el empeño del Gobierno por evitar que el sistema económico y financiero se colapsase, afectando a los ahorros de toda la

ciudadanía y a la actividad económica general y de las empresas en particular. De ahí, proviene el respaldo al sistema financiero, para avalarlo y para garantizar los depósitos de los ciudadanos. El esfuerzo por apoyar a nuestras entidades financieras ha sido un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de país que se ha producido después de que el sector financiero tuviera que buscar crédito en el exterior para financiar el endeudamiento de muchas empresas y de algunos sectores económicos.

La estrategia global diseñada por nuestro gobierno ha empezado a dar sus frutos gracias a seis años de un intenso y fructífero diálogo social. Los socialistas sabemos muy bien que la paz social que hemos disfrutado durante todo este tiempo no es improvisada, sino que se basa en el respeto y la promoción de los derechos de los trabajadores, y en un incremento de los derechos sociales, ampliamente consensuado con las organizaciones sindicales. En un momento de profunda crisis, y a pesar de los llamamientos obscenos de la derecha y de otros sectores para perturbar esa paz social, las organizaciones sindicales han actuado con enorme responsabilidad y solidaridad.

Aprovechando la crisis algunos podrían justificar fácilmente políticas de recorte social, por eso es precisamente en este momento cuando se ha puesto de manifiesto de forma descarnada las grandes diferencias ideológicas y políticas entre el PSOE y el PP. Durante los años en los que la economía española ha crecido, nuestro Gobierno ha promovido la ampliación y mejora de los derechos sociales, las pensiones, las becas, o incluso, la creación de nuevos derechos, como la atención a la dependencia. Ahora que la situación es difícil y que las restricciones presupuestarias son evidentes, el Gobierno socialista sigue comprometido con la ampliación y mejora de derechos sociales. Porque

en un tiempo como este, de inestabilidad e incertidumbre, para la izquierda la prioridad es la política social; mientras que para la derecha, la ampliación y mejora de los derechos sociales no es una prioridad nunca, ni en tiempos de bonanza económica y, mucho menos, en tiempos de crisis.

En los mejores momentos de la economía española y tras cuatro años de superávit por primera vez en la historia, el Gobierno del PSOE incrementó la política social y recuperó el tiempo perdido por ocho años de gobierno de la derecha. Y ello se hizo bajando la presión impositiva a los ciudadanos y a las empresas, sin dogmatismos y sin renunciar a hacer una de las políticas sociales más avanzadas y ambiciosas de nuestro entorno.

Para poder seguir con esa política, para mantener el estado del bienestar y la inversión productiva, el Gobierno tiene ahora que aumentar la presión fiscal. Es un aumento coherente y tiene una finalidad que coincide con nuestro compromiso social, con nuestros valores y con nuestro programa electoral. La disminución de impuestos por la que aboga la derecha, especialmente en estas circunstancias, no puede tener otra finalidad que el adelgazamiento del Estado, el debilitamiento de las instituciones y servicios públicos y el deterioro de la cohesión social, en aras de una supuesta vigorización de la actividad económica.

Por eso, desde el Comité Federal del PSOE compartimos plenamente los planes del Gobierno de España de aumentar la presión fiscal, porque entendemos que la única forma de salir de la crisis es seguir incrementando la inversión pública y la inversión productiva para compensar el descenso de la inversión privada; los socialistas apoyamos

la elevación temporal y limitada de la presión fiscal, porque entendemos que es una medida de solidaridad para evitar que el coste más doloroso de la crisis lo paguen los que tienen más dificultades o menos medios de defensa y los desempleados.

La recuperación definitiva de nuestra economía tiene que venir de la mano de una profunda transformación de nuestros sectores productivos tradicionales, y de la potenciación de nuevas capacidades para generar empleo y riqueza. Los próximos meses no sólo tendrán que ser de recuperación, sino también de cambio. La recuperación será posible a través del cambio y de la innovación, y ese proceso, aunque lento, es absolutamente imprescindible para el futuro de nuestro país y de nuestra economía. Para impulsar ese cambio, el proyecto de ley de economía sostenible que próximamente aprobará el Gobierno contendrá un amplio paquete de medidas de sostenibilidad, de mejora de la competitividad, de formación, de internacionalización de nuestras empresas y de eficiencia de las administraciones. Esa ley será la palanca que nos proporcione la fuerza suficiente para afrontar las grandes transformaciones que abrirán nuevos horizontes para nuestra economía.

En los próximos meses coexistirán señales claras de recuperación con otras cifras y magnitudes preocupantes, especialmente en el empleo, en lo que es una nueva fase de la crisis. Esas cifras, como todas las que hasta ahora se han producido, nunca nos dejarán indiferentes ni inactivos, serán el estímulo para estar más cerca de los que peor lo están pasando y para llevar a cabo con coherencia el plan que nos hemos trazado, que no puede ser otro que luchar sin descanso para mantener la cohesión social y reformar la economía, para que volvamos a crecer en la senda correcta.

En ese empeño el esfuerzo debe ser colectivo, de todas las Administraciones y gobiernos, de todas las instituciones y organizaciones, de toda la sociedad. Sólo los que no confían en España, en la vitalidad y en la capacidad de la sociedad española de sobreponerse a las grandes dificultades, pondrán impedimentos para que el horizonte de la recuperación definitiva llegue lo antes posible.

En los últimos meses hemos asistido a un ataque inusitado del PP a las instituciones, tribunales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las acusaciones sin fundamento y sin pruebas que el PP ha vertido sobre determinadas instituciones, cuestionando la separación de poderes y la independencia de las mismas, son propias de un partido y de unos dirigentes que tratan de minar la credibilidad de la democracia y debilitar sus principales mecanismos. La situación se agrava aún más, cuando la estrategia de la derecha responde sólo y exclusivamente a su interés por tapar los graves casos de corrupción que acechan al PP y a sus dirigentes en distintos niveles de ese partido, en varias comunidades autónomas, y en muchos ayuntamientos. Los socialistas denunciaremos esta estrategia del PP y manifestaremos que jamás un partido de gobierno ha mostrado tan poca lealtad a las instituciones, sacrificando su fortaleza y su credibilidad en aras de oscuros intereses partidarios.

En el primer semestre del año 2010, España asumirá por cuarta vez la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Para nuestro país y para Europa será un momento clave ante los grandes desafíos que nos plantea el siglo XXI. La presidencia española tiene que ser de acción, de iniciativa y de ambición política. La ciudadanía española va tener la oportunidad de impulsar el sentimiento europeísta, del cual nuestro país

ha dado sobrados ejemplos. En ese semestre debemos fortalecer una comunidad de valores y reforzar un proyecto político supranacional lleno de futuro. Los socialistas queremos trabajar por contribuir al desarrollo de una Europa fuerte y capaz de ejercer un liderazgo a favor de un nuevo orden internacional más justo y equilibrado; una Europa innovadora que promueva la igualdad y la cohesión social; una Europa dinámica y competitiva que contribuya al progreso y la estabilidad de todo el mundo.